
Editorial

El fondo y la superficie

GUILLERMO ALMEYRA

Hace rato que en el medio académico y periodístico se piensa en términos de naciones sin ver que estas no son social o culturalmente homogéneas sino una construcción histórico-cultural que abarca clases y sectores en conflicto permanente entre sí. En consecuencia, se difunde el hablar de conflictos de naciones y hasta de civilizaciones: así Marianne, la República, la señora Francia, se opondría al Tío Sam, o China o Rusia le disputarían a este su hegemonía y así sucesivamente. Una de las contradicciones del sistema capitalista –la diversidad y la competencia de capitales, la utilización por estos de su Estado, la territorialidad del capitalismo– es asumida como si fuera la única y principal y lo que aparece en la superficie es tomado como si fuese la esencia misma del problema.

Por supuesto, el nacionalismo, tanto el de los oprimidos como el de los opresores, es una gran fuerza ideológica, política y cultural, pero incluso el que se opone al imperialismo (o sea, al nacionalismo de los colonizadores), no es anticapitalista, aunque debilite a la manifestación actual del capitalismo que es el imperialismo del gran capital financiero y de los Estados a su servicio. Para la liberación social el nacionalismo antiimperialista es una condición necesaria pero no suficiente, porque la liberación nacional, en cualquier rincón de la Tierra, solo podrá ser total y definitiva cuando quienes viven de la opresión de la inmensa mayoría de la Humanidad hayan sido vencidos en sus propios países tras haber sido expulsados de la mayor parte de las regiones del globo. O sea, el comienzo de la liberación de unos pocos en un territorio periférico sólo puede culminar con éxito en la liberación general del sistema que dentro de cada nación oprime y explota a las mayorías y que hace que una minoría extranacional, apoyada siempre en Estados nacionales, oprima a otras naciones.

En una palabra: si se quiere ser consecuentemente anticolonialista y ayudar a descolonizar a los países dependientes hay que ser algo más que un nacionalista deseoso de reformar la relación de dependencia que impone el capitalismo, entre

otras cosas porque la parte principal del capital en nuestros países está en manos de las transnacionales y porque los grandes capitalistas locales están fusionados con el capital financiero internacional, de modo que una alianza entre ellos y sus explotados no es posible.

En nuestros países latinoamericanos el capitalismo se impuso mediante una salvaje explotación basada en la negación de las otras culturas, en la imposición de criterios racistas y de castas a partir del color de la piel así como en la servidumbre y la esclavitud. El imperialismo del Destino Manifiesto de Estados Unidos se apoya también en el concepto de pueblo elegido por Dios, el cual siempre ha sido desde los tiempos más remotos profundamente racista. El racismo, que muchas veces sus víctimas asumen como algo natural, lo cual las lleva incluso a intentar negar su origen étnico y su propia cultura a los que ven como inferiores, es una lacra que debe ser combatida constante y cotidianamente y en todos los campos pues permea la cultura de los países dependientes, donde se considera mejor y superior lo que proviene de las metrópolis. Pero la descolonización del país y del poder dentro del país no consiste sólo en que la mayoría mestiza o de origen europeo reconozca graciosamente las culturas, lenguas, tradiciones y formas de organización de los negros y los pueblos originarios asumiendo la tarea muchas veces imposible –por razones demográficas y geográficas– de concederles ghettos supuestamente autónomos. Un Estado plurinacional no deja de ser capitalista mientras no sea eliminada la contradicción principal, la explotación de clase, que ha requerido históricamente la opresión cultural y racial para consolidarse.

Por eso la autoorganización, la autonomía de los oprimidos debe construir poder en la conciencia de los pueblos que la practican bajo la forma asamblearia, de democracia directa y de decisiones colectivas, y levantar al mismo tiempo un poder dual frente al Estado central y al gobierno de este, aunque el mismo reconozca esos poderes locales, porque la independencia en la formación de las opiniones y reivindicaciones es la base de la ciudadanía, la cual no se opone en nada a la Federación de comunas autónomas, tal como lo demostraron las Comunas de la Revolución Francesa, que estaban federadas.

En escala mundial, el capitalismo nos ha retrotraído al siglo XIX, el del liberalismo sin trabas en el campo político-social con el apoyo de Estados poderosos. Se están anulando una tras otra las conquistas de más de siglo y medio de luchas civilizatorias de los trabajadores, como las ocho horas, la abolición del trabajo infantil o de la esclavitud, mientras la trata de personas es incluso práctica normal. En escala mundial estamos ante la necesidad de una Revolución Francesa, democrática y social, que no se completó ni siquiera en Francia. Ella incluye la descolonización y el combate al racismo en nombre de la igualdad del género humano y de la igualdad entre los géneros, así como una democratización de las decisiones productivas para salvar al planeta de un desastre ambiental.

O sea, necesitamos una revolución democrática con un curso anticapitalista que permita a la vez superar y enterrar al sistema capitalista de explotación y dominación. Esta puede parecer una visión utópica, pero es más realista que la de quienes creen poder construir Estados capitalistas criollos independientes, democráticos, descolonizados y no racistas en un mundo caracterizado por la creciente concentración del poder, el aumento de la dependencia de los países productores

de materias primas y con industrialización relativamente menos avanzada, la concentración de la riqueza y del poder que esta otorga en cada país, la imposición de una hegemonía cultural cada vez mayor por parte de los países metropolitanos y, por supuesto, el desarrollo de la idea de que el oprimido es una subespecie inferior para poder así tratar de justificar su opresión (como lo demuestran las intervenciones “civilizatorias” en Irak o Afganistán o la política de Israel en Palestina).

La lucha contra la corona española comenzó como parte de un intento de democratizar y modernizar a España junto con sus colonias en la línea recogida de los revolucionarios franceses por los Liberales de la península. Pero la Independencia, como salida obligada de los criollos ante la Restauración y los esfuerzos de recolonización y desviada por los intereses librecambistas de Inglaterra, llevó a aquellos a liquidar la línea liberadora de los revolucionarios haitianos, de Bolívar, de Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, José María Morelos, Francisco de Morazán y otros libertadores, para construir en cambio oligarquías locales, en una relación de dependencia semicolonial de las grandes potencias. La Independencia meramente formal estuvo manejada y controlada por estas, que con sus armas intervinieron en las diversas regiones de nuestro continente cuantas veces lo consideraron necesario, en alianza precisamente con dichas oligarquías o con una parte de ellas. Durante el siglo XIX se consolidaron esos Estados oligárquicos y dependientes a espaldas de las mayorías nacionales y sobre la base del racismo al que se agregó, a fines del siglo, la discriminación clasista frente a la naciente “cuestión social”. Ya a comienzos del 1900 y en la ola de las grandes revoluciones democráticas como la rusa de 1905, la persa, la china y la mexicana de 1910, en los distintos puntos de nuestro continente en manos de dictadores, caudillos y agentes imperiales, surgieron precursores como Manuel Ugarte, José Martí, José Carlos Mariátegui, que preanunciaron el surgimiento de los grandes movimientos campesinos y obreros y, a partir de la última mitad del mismo, también indígenas, que enfrentaron a la vez a las oligarquías y a la dominación imperialista y difundieron la idea de que la liberación nacional está unida a profundas reformas sociales y a la recuperación de una cultura nacional democrática, igualitaria, antirracista. A caballo entre el siglo XX y el nuestro, la Revolución Boliviana está retomando el hilo interrumpido de la de 1952 y hace que la lucha cultural, política y social en nuestro continente dé un salto inmenso hacia una Independencia no sólo política formal sino también económica, cultural y social.

Los conquistadores españoles reunieron a los que sobrevivieron a la conquista en artificiales Pueblos de Indios, para controlarlos mejor, por medio de los “principales” indígenas y de los sacerdotes, y acabaron con la antigua extensión territorial de los ayllus andinos, que tenían tierras altas, de montaña y de valle, para concentrarlos en lo que hoy queda de las comunidades.

El pasado precolonial ha sido prácticamente destruido y los habitantes originales de nuestra América fueron incorporados al capitalismo y mezclados con los africanos que eran sus víctimas y lo desarrollaban al venir como mercancías.

Los pueblos originarios, transformados y sumergidos en el mercado de fuerza de trabajo, en el de productos, en el de insumos, en el monetario, no viven hoy en “refugios” ni en comunidades aisladas ni quieren revivir un pasado que no puede

ser reconstruido y del cual toman el mito de la libertad y la unión. La luchas de esos pueblos, por lo tanto, no miran hacia el pasado sino que son profundamente modernas y buscan cambiar el Estado criollo y dependiente nacido hace dos siglos, para reconstruirlo y ser incluidos en él. Es cierto, ni en Chiapas ni en Ecuador, ni en Bolivia o Paraguay tienen los indígenas un modo de producción no capitalista que oponer al capitalismo que les rodea y que entra por todos los poros de su vida y de su economía y, cuando mucho, quieren modificarlo con una autogestión comunitaria que no lo anula. Pero eso no quiere decir que el artesano aymara de El Alto sea promotor de un capitalismo andino, mezcla de mercado mundial y ayllu (o, mejor, de lo que queda de este) porque mientras el capitalismo diferencia interna y rápidamente a las comunidades, el mercado mundial reduce y pone en peligro constantemente las conquistas estatales logradas por el movimiento.

Estamos, por consiguiente, en una fase de transición, tanto en Bolivia como en el arco andino y en todo el continente, en la que no se ha superado aún el horizonte capitalista, aunque hay importantes avances político-culturales (la autogestión campesino-indígena en Chiapas y en otras regiones de México, los elementos de construcción de poder dual en Bolivia, la autogestión en las fábricas recuperadas por sus trabajadores en Argentina y la nueva visión política nacional, en ruptura con el aislamiento étnico o social, de vastos sectores de los movimientos sociales).

Estos movimientos que no miran hacia el pasado sino hacia el futuro dan el impulso que lleva a algunos gobiernos (Venezuela, Ecuador, Bolivia) a hablar de un futuro socialista, sin especificar en qué se diferenciaría ese sistema del burocrático "socialismo real" de la Unión Soviética y Europa Oriental o de otros "socialismos" como, por ejemplo, el de los militares de Myanmar (un capitalismo de Estado reaccionario aunque con ciertas políticas antiimperialistas). Incluso algunos de esos gobiernos confunden la necesidad de una indispensable acción común regional y mundial contra la dominación capitalista y el poder de las transnacionales con una alianza "socialista" de gobiernos o de partidos gubernamentales que no salen ni pretenden salir del marco del capitalismo.

Las diversas regiones de América Latina que sufren esta crisis ecológica y de la civilización misma, presentan en efecto características particulares. Todos los Estados del conjunto que, por comodidad, calificamos de América Latina son Estados capitalistas, que dependen fuertemente del capital financiero mundial y en todos ellos (con la posible excepción de Cuba y de Bolivia), domina ampliamente la hegemonía cultural del imperialismo, que se perpetúa por medio de los sistemas educativos, los medios de información, la imposición de gustos, subculturas, lenguajes, vestimentas, alimentos y diversiones.

Esta unidad en la dependencia es la base real de la idea de un destino común, el cual solamente es posible mediante una liberación nacional y una descolonización que aún deben ser alcanzadas. Mucho más que las lenguas oficiales neolatinas más o menos entrelazadas con las lenguas de los pueblos originarios o con las de los esclavos africanos, mucho más que un primer momento de historia liberadora común, a principios del siglo XIX, nos une la necesidad de resistir las imposiciones imperiales y, para eso, de unirnos e integrarnos para poder liberarnos.

En esta diversidad centrípeta hay grandes diferencias subregionales. En algunos Estados los gobiernos tienden a construir un tipo particular de capitalismo de Es-

tado, como en Cuba, Venezuela, Bolivia; otros han dolarizado su moneda, como Ecuador o Panamá, lo cual agrava su dependencia a pesar de los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por sentar las bases constitucionales e institucionales para la lucha por la liberación económica y política; otros más, como los gobiernos de Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú o Chile, aplican las funestas recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que llevaron al estallido de la actual crisis y persisten en sostener políticas neoliberales; en otros, por último, gobiernos deseosos de modernizar y democratizar sus países y de abrir el camino a una mayor justicia social, como en Paraguay, chocan sin embargo con un aparato estatal profundamente corrupto y reaccionario y no pueden cambiar las políticas neoliberales heredadas o, como Argentina, Uruguay y Brasil, las aplican pero intentan modificarlas con políticas sociales distributivas.

Pero lo que tienen todos en común –independientemente de la ortodoxia neoliberal de algunos que los diferencia del estatismo neodesarrollista de otros– es la aceptación de hecho de la subordinación de sus respectivos países, como exportadores de materias primas, a las imposiciones del mercado mundial y al tipo de producción y de consumos impuestos por los países industrializados. Siguen la vía muerta del extractivismo en vez de buscar alternativas en la producción, en el consumo, en los valores y de subvertir el funcionamiento de su economía y de su sociedad mediante la planificación democrática, en el territorio, de la utilización de los recursos naturales, económicos y sociales, la producción en autogestión para las necesidades reales –para eliminar así los despilfarros y las falsas necesidades del consumismo inducido– y la planificación de los intercambios urbano-rurales e intrarregionales. O sea, aunque lleguen a hablar incluso de “socialismo”, no encaran el funcionamiento de un nuevo tipo de aparato estatal democrático, autogestionario, respetuoso de las autonomías, centralizado desde “abajo” hasta “arriba” y realmente integracionista en el campo regional como único modo de romper con la dependencia de las transnacionales y de las finanzas extranjeras. Por el contrario, atribuyen al viejo tipo de Estado semicolonial, centralizado verticalmente la tarea de sacar del atraso al país mediante un frondoso e ineficiente aparato burocrático (el cual, por otra parte, es la expresión y también en parte la causa de ese atraso).

Esa es una vía sin perspectivas porque la herramienta mezquina e ineficaz del aparato estatal nacional no puede impedir la acción de la crisis de la economía capitalista mundial. Puesto que tampoco es posible desvincularse repentina y abruptamente del mercado mundial, dada la compleja relación que existe entre los insumos y tecnologías importadas y la producción nacional así como entre el tipo de mercancías que un país exporta y la obtención de las divisas necesarias para su desarrollo, la vía de la autarquía, del “desenchufe” o la “fuga” del mercado es tan estéril como la del desarrollismo, que ha sido teorizado en América Latina y en ella también varias veces ha fracasado en sus diversas variantes.

Sólo queda, por consiguiente, la combinación entre la continuidad y la ruptura, desarrollando nuevas relaciones de producción, nuevos consumos sostenibles y basados en recursos nacionales, nueva organización del territorio y un nuevo uso del mismo aunque durante años se mantenga una inserción en el mercado mundial de tipo fundamentalmente extractivista. Porque lo nuevo no nace

de cero ni en la economía ni el terreno político sino que nace de lo viejo pero lo rompe y supera. Lo mismo es válido para la extensión de la autonomía y la autogestión, que son también un aprendizaje y un arma de transformación democrática y moral de los trabajadores y comienzan en pequeña escala local pero tienen potencialidad para desarrollarse en otra mucho más amplia y superior. O sea, que la vía para la liberación económica pasa por la construcción de un Estado democrático, de ciudadanos, que adquieran poder sobre sí mismos, la sociedad y las relaciones sociales.

Por eso en este número seguimos analizando algunos ejemplos actuales –en Nicaragua, en Venezuela– gracias a trabajos de jóvenes investigadores, al mismo tiempo que subrayamos la necesidad de recuperar la memoria histórica, difundiendo el pensamiento liberal revolucionario de José Martí o recordando las intervenciones estadounidenses en Panamá; e intentamos, al mismo tiempo, analizar algunas de las experiencias parciales y limitadas de integración regional que podrían servir para conquistar una futura independencia real de todas las regiones de nuestro continente.

América Latina, el mundo en crisis, CLACSO y el OSAL están entrando en una década muy difícil pero llena de importantes retos y que exige un análisis constante de los cambios en curso y de lo que podría ser alternativo. Esa seguirá siendo nuestra tarea.

Enero del 2010